

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

FEDe. Colombia hace un llamado a acatar la decisión judicial que suspendió la Directiva 11 de 2024 sobre contratación de pauta institucional a través de medios alternativos y rechaza la radicalización del discurso oficial

La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) hace un llamado a acatar la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 19 de agosto de 2025, mediante la cual se suspendieron de manera provisional los efectos de la Directiva 11 de 2024. Esta directiva ordenaba a las entidades públicas del nivel nacional destinar el 33,3 % del presupuesto de comunicaciones a la contratación de servicios de publicidad oficial a través de medios alternativos, comunitarios y digitales.

El Consejo de Estado consideró que la directiva vulneraba las normas y principios del Estatuto General de Contratación y no garantizaba, por sí misma, la pluralidad informativa. En consecuencia, la medida cautelar suspendió sus efectos mientras se hace el estudio de fondo.

Con la decisión del Consejo de Estado, cualquier instrucción que disponga la destinación de recursos públicos para la contratación de servicios de divulgación institucional con medios alternativos, comunitarios y digitales, bajo los términos previstos en la Directiva 11 de 2024, resulta contraria al ordenamiento jurídico si no se ajusta a los procedimientos previstos en el régimen de contratación estatal. Además, implica desconocer una decisión judicial de obligatorio cumplimiento.

La Fundación subraya que incluso las órdenes que para estos efectos provengan del presidente de la República deben observar el marco jurídico vigente y lo dispuesto en la decisión judicial. De lo contrario, se desconocerían la separación de poderes, el principio de legalidad en la contratación estatal y se comprometerían la transparencia, la igualdad y la libre competencia, así como la garantía del pluralismo informativo que debe orientar la publicidad institucional. Es necesario enfatizar en que la comunicación oficial del Estado debe ejercerse dentro del marco constitucional y legal.

Por lo tanto, en FEDe. Colombia expresamos nuestra preocupación frente a la radicalización de los discursos institucionales que promuevan la polarización y la confrontación social. Este tipo de mensajes, en especial cuando provienen del presidente de la República, pueden minar la convivencia pacífica, incentivar la intolerancia y propiciar escenarios de violencia política y social.

El presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y símbolo de la unidad nacional, tiene el deber de encauzar la comunicación pública hacia la promoción de la paz, el fortalecimiento de la confianza en las instituciones y el respeto por la institucionalidad democrática. En el contexto electoral, es indispensable que el lenguaje oficial contribuya a la deliberación plural y la construcción de consensos, y que evite que la comunicación institucional sirva fines de confrontación política.

Reiteramos que los medios de comunicación institucionales y la publicidad oficial deben dirigirse de manera responsable a facilitar la participación ciudadana, promover la opinión libre, crítica e informada y a facilitar el control ciudadano del poder público.